

DOCUMENTO PARA CONSULTA PÚBLICA

Carta de Derechos Digitales

**Propuesta de la Asociación
Profesional de Cuerpos
Superiores de Sistemas y
Tecnologías de la Información
de las Administraciones
Públicas (ASTIC).**

Dirigido a: derechosdigitales@economia.gob.es

CARTA DE DERECHOS DIGITALES

DERECHOS DE LIBERTAD

I

Derechos y libertades en el entorno digital

1. Los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España están garantizados en el entorno o espacio¹ digital.

Comentario 1:

Sería recomendable incluir la definición de entorno o espacio digital dentro del propio texto dada la relevancia del término, simplificando la definición actual.

En el texto parece que entorno y espacio digital se tratan como conceptos sinónimos. Sin embargo, en la definición parece que no lo son. Incluso se utiliza espacio en la definición de entorno y entorno en la definición de espacio.

Si el espacio digital se definiera como el conjunto de entornos, En la redacción del derecho, habría que hacer referencia exclusivamente al espacio digital

Se aconseja aclarar si la carta se dirige exclusivamente a los derechos de las persona físicas o se incluyen también los relativos a las personas jurídicas, aunque por analogía con la [Carta de los Derechos Fundamentales de la UE](#) va dirigida a los ciudadanos de la UE se presupone que se circunscribe a las personas físicas.

2. Todas las personas poseen idénticos derechos en el entorno digital y en el analógico, sin perjuicio de las limitaciones que de acuerdo con la Constitución y las leyes pudieran establecerse atendiendo a las peculiaridades de cada ámbito.

¹ A los efectos de esta Carta, por entorno digital se entiende el conjunto de sistemas, aparatos, dispositivos, plataformas e infraestructuras que abren espacios de relación, comunicación, interrelación, comercio, negociación, entretenimiento y creación que permiten a las personas físicas o jurídicas de forma bilateral o multilateral establecer relaciones semejantes a los existentes en el mundo físico tradicional. Espacio digital se refiere a los lugares digitales que abren los entornos digitales en los que es posible la comunicación, interrelación, comercio, negociación, entretenimiento y creación de forma especular con el mundo físico tradicional. La ciudadanía digital se refiere al estatuto de derechos y obligaciones de la persona, con independencia de su estatuto jurídico de nacional

Comentario 2:

Se aconseja eliminaría la referencia al entorno analógico, puede no ser entendida adecuadamente, sería más adecuado, si quiere mantenerse el comentario, sustituirla por entorno físico.

3. Las leyes concretarán, en cuanto sea necesario, las especificidades de los derechos en el entorno digital y regularán su desenvolvimiento y efectividad estableciendo garantías y promoviendo la igualdad en el ecosistema digital.

4. Los procesos de transformación digital, el desarrollo y el uso de la tecnología digital, así como cualquier proceso de investigación científica y técnica relacionado con ellos o que los utilice instrumentalmente, deberán tener presente la exigencia de garantizar la dignidad humana, los derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad y ordenarse al logro del bien común.

5. El principio de cumplimiento normativo desde el diseño deberá aplicarse íntegramente al desarrollo científico y tecnológico, así como a sus resultados. Los desarrollos científicos y tecnológicos contemplarán en la determinación de sus requerimientos un análisis sobre el cumplimiento de tal principio.

II

Derecho a la protección de datos personales

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y con el consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación.

Comentario 3:

La redacción de este derecho está copiada literalmente del artículo 8 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la UE](#).

Sin embargo parece destacar el consentimiento respecto al resto de bases legitimadoras, que operan en igualdad de condiciones. Se propone sustituir la redacción por:

2. Estos datos se tratarán de acuerdo con los principios establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos.

El derecho a la rectificación de los datos personales no es un derecho absoluto y no siempre es posible ejercerlo, como parece indicarse en la carta. Un ejemplo concreto en el que no podría concederse es el relativo a las grabaciones de cámaras de videovigilancia. A pesar de la literalidad, copiada de [Carta de los Derechos Fundamentales de la UE](#), coincido con este comentario.

Se propone una redacción más genérica:

2. bis Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y ejercer los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos.

3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente.

III

Derecho a la identidad en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho a la propia identidad en el entorno digital, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional y europeo.

2. La propia identidad no podrá ser alterada, controlada o manipulada por terceros contra la voluntad de la persona.

3. Se deberán establecer las garantías que permitan preservar, controlar y verificar la propia identidad en el entorno digital.

Comentario 4:

Aunque en el artículo se defiende que la identidad virtual es equivalente a la física y no requiere protección específica, en el apartado 2 parece sugerirse

que la identidad puede ser alterada en base a la voluntad de la persona, se sugiere clarificar este aspecto sustituyéndolo por la defensa contra la suplantación de la identidad.

IV

Derecho al pseudonimato

1. De acuerdo con las posibilidades técnicas disponibles los entornos digitales permitirán el acceso en condiciones de pseudonimidad.
2. El diseño de la pseudonimidad a la que se refiere el párrafo anterior asegurará la posibilidad de reidentificar a las personas en los casos y con las garantías previstos por el ordenamiento jurídico.

Comentario 5:

En este artículo se incluyen dos términos diferentes, por una parte el derecho como autor a utilizar un pseudónimo en lugar de la identidad propia y por otra parte la técnica de «seudonimización» propuesta por el RGPD para minimizar el riesgo en algunos tratamientos.

Sería necesario definir el concepto de pseudonimato. Entendemos que se refiere a la posibilidad de participar del espacio digital ocultando la identidad al resto de usuarios, pero que no impide la identificación del usuario por parte de los operadores del servicio en caso de necesidad (por ejemplo, por haber vulnerado una ley)

En el ámbito de la propiedad intelectual los autores tienen derecho al anonimato y por tanto a no revelar su identidad. Sin embargo en otros ámbitos es obligatorio proceder a la verificación previa de la identidad antes de facilitar el servicio.

En esta línea, convendría aclarar en qué condiciones se puede prohibir a un usuario que acceda a un servicio utilizando un seudónimo.

V

Derecho a no ser localizado y perfilado

1. El derecho a la libre autodeterminación individual y la garantía de las libertades comporta el derecho a no ser objeto de localización, ni a ser sometido a análisis de la personalidad o conducta que impliquen el perfilado de la persona.
2. Sólo serán posibles tales tratamientos de información personal con el consentimiento de la persona afectada o en los casos y con las garantías previstos en las leyes.

Comentario 6:

Este derecho no deja de ser un caso particular del derecho de protección de datos. Podría incluirse en ese derecho (II).

VI

Derecho a la seguridad digital

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad en el entorno digital.
2. Los poderes públicos adoptarán y promoverán las medidas necesarias para garantizar aquélla, en colaboración **siempre** con las empresas tecnológicas y con los usuarios.

Comentario 7:

Debería eliminarse el término siempre, al restringir la capacidad de los poderes públicos imponiéndoles una obligación que no se ajusta al ordenamiento jurídico.

No es posible eliminar todos los riesgos en materia de seguridad. En consecuencia, podría pedirse que los entornos que presentan riesgos en materia de seguridad que no puedan subsanar, al menos informen claramente de estos riesgos a los usuarios y/o recaben su consentimiento antes de acceder al entorno.

VII

Derecho a la herencia digital

1. Se reconoce el derecho a la herencia digital de todos los bienes y derechos de los que sea titular la persona fallecida en el entorno digital.
2. El acceso a los contenidos y servicios digitales de los que fuera titular la persona fallecida se hará conforme a las reglas generales del Código Civil, las leyes de las Comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio y el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Comentario 8:

Debería explicitarse qué se entiende por “herencia digital”, parece querer extenderse el Derecho al “testamento digital” regulado en el artículo 96 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales .

DERECHOS DE IGUALDAD

VIII

Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho a la igualdad en los entornos digitales, la no discriminación y la no exclusión. En particular, se reconoce el derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres en entornos digitales. Los procesos de transformación digital aplicarán la perspectiva de género.
2. Los poderes públicos impulsarán políticas ordenadas para la garantía del acceso efectivo de todas las personas a los servicios y oportunidades que ofrecen los entornos digitales en cualquiera de sus dimensiones, garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones, atendiendo particularmente a la brecha territorial y

asegurando un derecho de acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet para toda la población.

Comentario 9:

Debe garantizarse el derecho a no ser discriminado no sólo en el uso y acceso a las tecnologías de la información sino también en la participación activa en la creación de contenidos y especialmente en la capacitación en habilidades digitales o tecnológicas.

IX

Protección de menores en el entorno digital

1. Los progenitores, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos, de los entornos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.
2. Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en entornos digitales en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.
3. Salvo en las excepciones previstas en las leyes, se prohíben los tratamientos de la información de los menores orientados a establecer perfiles de personalidad en entornos digitales.
4. Se consideran ilícitas las prácticas de perfilado susceptibles de manipular o perturbar la voluntad de los menores y, en particular, la publicidad basada en este tipo de técnicas.
5. Se impulsará el estudio del impacto en el desarrollo de la personalidad de los menores derivado del acceso a entornos digitales, así como a contenidos nocivos o peligrosos. Dicho estudio prestará particular atención a sus efectos

en la educación afectivo-sexual, las conductas dependientes, la igualdad de género, así como los comportamientos antidemocráticos, racistas y violentos.

Comentario 10:

En el apartado cuatro se introducen límites no previstos en la normativa vigente que ya prevé la especial protección de este colectivo incluyendo garantías específicas. Se sugiere eliminar o adecuar este apartado a la normativa vigente en materia de protección de datos.

En la línea de comentarios anteriores, si se mantienen los derechos, se propone incluir los apartados 3 y 4 al derecho de protección de datos (II).

En el apartado 5 se condiciona el estudio de impacto a características prefijadas pudiendo limitarse el ejercicio profesional. Se aconseja limitar el apartado al impulso del estudio de impacto en el desarrollo de la personalidad de los menores derivado del acceso a entornos digitales únicamente.

X

Protección de personas con discapacidad en el entorno digital

1. Se garantizará la accesibilidad de los entornos digitales a las personas con discapacidad tanto desde el punto de vista tecnológico como respecto de sus contenidos. En particular, asegurarán que la información relativa a las condiciones legales del servicio resulte accesible y comprensible.
2. Los entornos digitales, y en particular los que tengan por finalidad la participación política digital, asegurarán la participación efectiva de las personas con discapacidad o diversidad funcional.
3. Se garantizará el derecho a la educación digital de las personas con discapacidad.

Comentario 11:

En relación el apartado 3, parece más razonable incluirlo en el derecho XV, sobre educación digital.

XI

Protección de las personas mayores en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho de las personas mayores al acceso a los entornos digitales.
2. Se garantizará la accesibilidad a los entornos digitales a las personas de este colectivo.

Comentario 12:

No parece tener sentido reconocer de manera específica el derecho de acceso a las personas mayores, dado que se trata de un derecho universal. Se aconseja suprimir el primer apartado.

La capacitación en el entorno digital es necesaria para toda la población, incluidos los empleados públicos. Sería necesario incluirlo en la carta, concretamente en el derecho XV, relativo a educación digital.

La carta podría comprometerse a ampliar el derecho al servicio universal a servicios específicos que ampliaran el conjunto de servicios básicos actual de comunicaciones como podría ser una cuenta de correo, servicio básico de asistencia en el uso de medios digitales, ...

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y DE CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

XII

Derecho a la neutralidad digital

Los poderes públicos garantizarán el derecho de los usuarios a la neutralidad de internet. Los proveedores de servicios de internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

XIII

Libertad de Expresión y Libertad de Información

1. Todos tienen derecho a las libertades de expresión e información en entornos digitales en los términos previstos por la Constitución. Se garantizarán los principios constitucionales relativos a la veracidad, el pluralismo informativo y la diversidad de opiniones e informaciones.

2. Los responsables de medios de comunicación, así como los de los entornos digitales que o bien tengan por objeto el ejercicio de libertades del párrafo anterior por sus titulares, o bien provean tal servicio a sus usuarios, adoptarán protocolos adecuados para garantizar la información y transparencia respecto a los derechos de todas las personas a:

- a) Conocer cuándo la información sea elaborada sin intervención humana mediante procesos automatizados.
- b) A conocer cuándo una información ha sido clasificada o priorizada por el proveedor mediante técnicas de perfilado o equivalentes. Cuando esta información sea patrocinada por un tercero deberá informarse de modo específico sobre la naturaleza publicitaria de la misma.
- c) A solicitar del prestador la no aplicación de técnicas de análisis que permitan ofrecer información que afecte a las libertades ideológica, religiosa, de pensamiento o creencias.
- d) A posibilitar el ejercicio del derecho rectificación ya sea frente a medios de comunicación, ya sea ante aquellos usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.

- e) A solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las

noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio.

En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior.

3. Los procesos de verificación y retirada de contenidos se limitarán a aquellos que en entornos digitales se encuentran limitados por la prohibición de censura previa. En los supuestos en los que la ley ampare la retirada de un contenido, los prestadores deberán notificarla al usuario y disponer de un procedimiento de reclamación de estas decisiones. Se impulsarán mecanismos de autorregulación transparentes que contemplen los criterios y los procedimientos que determinan en este ámbito la actuación de los prestadores e incorporen procedimientos de reclamación y revisión de las decisiones de retirada de contenidos.

Comentario 13:

Convendría reforzar el derecho a una información veraz, en caso de no poder divulgarse las fuentes en base al secreto profesional periodístico, podrían exigirse otro tipo de salvaguardas, como las actuaciones de verificación de la información publicada que se han llevado a cabo

Sería conveniente considerar y distinguir los nuevos actores y agentes que han surgido en el campo de la información y la comunicación pública al objeto de los diferenciar sus roles y adecuar las obligaciones, algunos actores juegan un papel pasivo, mientras otros sí juegan un papel activo pudiendo ejercer control sobre los contenidos que se ofrecen en los servicios de información.

XIV

Derecho a la participación ciudadana por medios digitales

1. De acuerdo con las leyes, se impulsarán procedimientos de participación de las personas en la vida pública.

Para ello, se promoverán entornos digitales que contribuyan a un derecho de acceso efectivo a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, así como a la propuesta, e implicación de las personas en las actuaciones de las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales, de acuerdo con la Constitución.

2. Los procedimientos de participación ciudadana garantizarán condiciones de igualdad sin discriminaciones ni exclusión de personas, con sujeción al ordenamiento jurídico.

XV

Derecho a la educación digital

1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.

2. El profesorado recibirá la formación para adquirir las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.

3. En particular los poderes públicos con competencia en la materia promoverán:

- a) Los planes de formación profesional que se ordenarán a la inserción de las personas trabajadoras en los procesos de transformación digital.
- b) La formación de personas adultas con particular atención a los mayores.
- c) La educación audiovisual en el entorno digital, con la finalidad de promover la capacidad crítica y afrontar las prácticas de desinformación.

4. Se reconoce el derecho a la libertad de acceso a la educación y a la libertad de creación de centros que presten sus servicios a través de entornos digitales, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes respecto al cumplimiento de la normativa educativa y de la obligación de la escolarización presencial en los niveles de educación obligatoria.

5. Se impulsará la Educación para la Ciudadanía Digital, porque una parte esencial de la estrategia de digitalización de la educación pasa por el desarrollo de competencias que permitan que el uso de las tecnologías sea beneficioso para cada individuo y para el conjunto de la sociedad. Esta dimensión pasa por cuestiones como:

- a) Que los estudiantes aprendan a hacer un uso ético de las herramientas digitales en cuestiones como el uso de datos y el respeto a la privacidad ajena; o la identificación de información y comportamientos en la red que puede comprometer su salud o bienestar y la de terceros.

Fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico que les ayude a distinguir hechos objetivos de meras opiniones sin evidencias, que les permitan rechazar estereotipos discriminadores, los discursos de odio o el ciberacoso.

- b) Fomentar también la capacidad de participar en la generación de información de manera activa, creativa y, sobre todo, responsable.
- c) Atender la diversidad de talentos y de procesos y ritmos de aprendizaje, particularmente aquéllos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo.

XVI

Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones públicas

1. Se reconoce el derecho de igualdad en el acceso a los servicios públicos y en las relaciones digitales con las Administraciones públicas. A tal fin se

promoverán políticas públicas activas que garanticen el acceso a los sistemas y los procedimientos.

2. El poder público autor de una actividad en el entorno digital deberá identificar a los órganos responsables de la misma.

3. El principio de transparencia y de reutilización de datos de las Administraciones públicas guiará la actuación de la Administración digital, de conformidad con la normativa sectorial. En particular, se garantizará el derecho de acceso a la información pública, se promoverá la publicidad activa y la rendición de cuentas y se velará por la portabilidad de los datos y la interoperabilidad de los formatos, sistemas y aplicaciones.

4. Siempre que sea posible se promoverá la universalidad y la neutralidad de las tecnologías usadas por las Administraciones públicas, así como su diseño y uso conforme a los principios éticos que acompañan a esta Carta. Así mismo se adoptarán las medidas precisas para garantizar que la prestación de los proveedores de servicios que colaboren con ellos por medios digitales se realicen conforme a las disposiciones de esta Carta.

5. Se ofrecerán alternativas en el mundo físico que garanticen los derechos de aquellas personas que opten por no utilizar recursos digitales.

6. Los daños causados por actividades o decisiones digitales, podrán dar lugar a un derecho a la indemnización por toda lesión que las personas físicas o jurídicas sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, de acuerdo con las leyes.

7. Los derechos de la ciudadanía en relación con la Inteligencia Artificial reconocidos en esta Carta resultarán también de aplicación en el marco de la actuación administrativa, en particular en los aspectos referidos al diseño y al uso de algoritmos.

En todo caso, se reconoce el derecho a:

- a) Que las decisiones y actividades en el entorno digital respeten los principios de buen gobierno y el derecho a una buena Administración digital.
- b) Un procedimiento de toma de decisiones con las debidas garantías.
- c) Obtener una motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones que se adopten en el entorno digital, con justificación de las normas jurídicas relevantes al caso y de los criterios de aplicación de las mismas
- d) Que la adopción de decisiones discrecionales quede reservada a personas, salvo que una norma con rango de ley permita la adopción de decisiones automatizadas en este ámbito.

Será necesaria una evaluación de impacto en los derechos digitales en el diseño de los algoritmos en el caso de adopción de decisiones automatizadas o semiautomatizadas. En todo caso, serán objeto de aprobación previa de los sistemas algorítmicos que se vayan a usar para la toma de decisiones, con determinación de su ámbito concreto de aplicación y estructura de funcionamiento.

Comentario 14:

Debería garantizarse además el derecho a la accesibilidad y usabilidad de los espacios digitales públicos.

Debería incluirse el derecho a la reutilización de la información del sector público en consonancia con la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público, la ley 18/2015, de 9 de julio que modifica la anterior y la Directiva 2019/1024/UE del Parlamento Europeo y del Consejo publicada en el DOUE el 26 de junio de 2019 en materia de apertura de datos del sector público, y la Directiva 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.

Sería necesario realizar no sólo Evaluación de Impacto sino también auditorías para revisar los efectos del uso de los algoritmos de IA dado el sesgo que pueden introducir pudiendo ser discriminatorio para grupos minoritarios.

XVII

Derechos en el ámbito laboral

1. En el ámbito laboral trabajadores y los empleados públicos tienen derecho a:

- a) La desconexión digital.
- b) La protección de su intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador, así como frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.
- c) La intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización.

En todo caso se garantizarán condiciones de trabajo digno en los entornos digitales.

2. Cuando la naturaleza del puesto y las capacidades de la organización lo permitan se promoverán condiciones de acceso al teletrabajo. En este caso, la ordenación de la prestación laboral se desarrollará con pleno respeto a la dignidad de la persona trabajadora garantizando particularmente su derecho a la intimidad, la esfera privada del domicilio, los derechos de las personas que residen en él y el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar.

3. En los procesos de transformación digital:

- a) Deberá proporcionarse a las personas trabajadoras una formación adecuada que permita su adaptación a las nuevas condiciones laborales;
- b) Se informará a la representación de los trabajadores sobre los cambios tecnológicos que vayan a producirse en la empresa y a participar en la toma de decisiones sobre la transformación digital y las consecuencias laborales que la misma pueda implicar;

4. Sin perjuicio del derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada, salvo en los supuestos previstos por la ley, se informará a los representantes de los trabajadores y las personas directamente afectadas sobre el uso de la analítica de datos o sistemas de inteligencia artificial en la gestión, monitorización y procesos de toma de decisión

en materia de recursos humanos y relaciones laborales. Este deber de información alcanzará como mínimo al conocimiento de los datos que se utilizan para alimentar los algoritmos, su lógica de funcionamiento y a la evaluación de los resultados.

Comentario 15:

Debería adecuarse el papel de los representantes de los trabajadores a la ya reconocida en la normativa vigente evitando entrar en conflicto con la libertad de empresa y poder de dirección del empresario.

En relación con el apartado 1.c) la intimidación ante la utilización de sistemas de geolocalización no puede ser universal y puede presentar excepciones. Como ejemplo podría pensarse en equipos de gestión de flotas o empresas de distribución.

XVIII

La empresa en el entorno digital

1. Se reconoce la libertad de empresa en los entornos digitales en el marco de la economía de mercado. El desarrollo tecnológico y la transformación digital de las empresas deberá respetar los derechos digitales de las personas.
2. Los poderes públicos promoverán la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación ordenados a la transformación digital de las empresas, el emprendimiento digital y el fomento de las capacidades de la sociedad para la generación de ciencia y tecnología nacionales.
3. Se desarrollarán las condiciones que permitan la creación de espacios de pruebas controladas para desarrollar nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos basados en la tecnología (*sandbox*).

Comentario 16:

Los poderes públicos velarán por la existencia de competencia efectiva en el sector digital asegurando la capacidad de opción entre diferentes productos, servicios y proveedores y evitando monopolios y dependencias ajenas al mercado único digital europeo.

DERECHOS DIGITALES EN ENTORNOS ESPECÍFICOS

XIX

Derecho de acceso a datos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo

1. El uso de los datos del sector público para el bien común se considera un bien de interés general.
2. En el marco definido por las leyes se promoverán condiciones que garanticen la reutilización de la información y el uso de los datos para promover la investigación, la innovación y el desarrollo.
3. Cuando se trate de datos personales:
 - a) Los datos podrán ser tratados con fines de investigación científica, innovación y desarrollo previa anonimización.
 - b) Únicamente será admisible el tratamiento de datos personales o pseudonimizados cuando la naturaleza de la actividad lo requiera y se cuente con el consentimiento o una autorización expresa prevista en norma con rango de ley.
 - c) Se promoverán programas de donantes de datos para fines de investigación.

En todo caso serán de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la legislación sectorial que corresponda.

4. El desarrollo de la investigación científica y tecnológica susceptible de repercutir en el ser humano respetará su dignidad y garantizará a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y

libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.

5. La investigación en áreas como la neurociencia, la genómica o la biónica, entre otras, aplicará lo dispuesto en los párrafos anteriores y, en particular, garantizará el respeto a la dignidad, la libre autodeterminación individual, la intimidad y la integridad de las personas.

Comentario 17:

La Carta no debe entrar en colisión con la normativa vigente en materia de protección de datos que dedica un apartado específico al tratamiento de datos personales en el ámbito de la salud, fines de investigación, estadística pública y archivo, sin exigir la anonimización previa, al igual que se indica en anteriores comentarios (3) es necesario contemplar la totalidad de bases legitimadoras para los tratamientos de datos personales contempladas en el RGPD.

XX

Derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible

1. El desarrollo de la tecnología y de los entornos digitales deberá perseguir la sostenibilidad medioambiental y el compromiso con las generaciones futuras.
2. Los poderes públicos impulsarán políticas ordenadas a la consecución de tales objetivos con particular atención a la sostenibilidad, durabilidad, reparabilidad y retrocompatibilidad de los dispositivos y sistemas evitando las políticas de sustitución integral y de obsolescencia programada.
3. Los poderes públicos promoverán la eficiencia energética en el entorno digital, favoreciendo la minimización del consumo de energía y la utilización de energías renovables y limpias.

XXI

Derecho a la protección de la salud en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho de todas las personas al acceso a los servicios digitales de salud en condiciones de igualdad, accesibilidad y universalidad.

2. Los poderes públicos promoverán que la investigación y la tecnología contribuyan al logro de una medicina preventiva, predictiva, personalizada, participativa y poblacional.

2. El sistema de salud garantizará el desarrollo de sistemas de información que aseguren la estandarización, la interoperabilidad, el acceso y la portabilidad de la información del paciente.

3. El empleo de sistemas digitales de asistencia al diagnóstico, y en particular de procesos basados en inteligencia artificial no limitará el derecho a la libertad diagnóstica del personal facultativo.

4. Los entornos digitales de salud garantizarán el pleno respeto de los derechos fundamentales del paciente y en particular su derecho a ser informado y consentir en el tratamiento de sus datos personales con fines de investigación y en la cesión a terceros de tales datos cuando tal consentimiento sea requerido.

6. Los poderes públicos impulsarán el acceso universal de la población a los dispositivos tecnológicos desarrollados con fines terapéuticos o asistenciales.

XXII

Libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho a la libertad de creación en el entorno digital, promoviendo programas de formación en el sistema educativo y garantizando el derecho a la remuneración del personal creativo.

2. Se garantizará el acceso a la cultura en el entorno digital, en los términos de los artículos 44.1 y 149.2 de la Constitución Española, así como de la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 20 de octubre de 2005. En todo caso se tendrán en cuenta las normas sobre propiedad intelectual y los derechos derivados.

3. En particular, los poderes públicos facilitarán el acceso digital a las diversas manifestaciones artísticas y culturales en espacios de su titularidad o de terceros

con quienes colaboren de forma directa o indirecta. En particular, se promoverá el acceso digital a obras de dominio público.

XXIII

Derechos ante la Inteligencia artificial

1. En el desarrollo y ciclo de vida de los sistemas de Inteligencia Artificial
 - a) Se deberá garantizar el derecho a la no discriminación, cualquiera que fuera su origen, causa o naturaleza del sesgo, en relación con las decisiones y procesos basados en algoritmos.
 - b) Se asegurarán la información, transparencia, auditabilidad, explicabilidad y trazabilidad.
 - c) Se deberá garantizar la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad.
2. Las personas tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada, que produzcan efectos jurídicos o les afecten significativamente de modo similar, salvo en los supuestos previstos en las leyes. En tales casos se reconocen los derechos a:
 - a) Solicitar una supervisión e intervención humana;
 - b) Impugnar las decisiones automatizadas o algorítmicas.
3. Se deberá informar a las personas sobre el uso de servicios basados en Inteligencia Artificial que se comuniquen con seres humanos utilizando el lenguaje natural en todas sus formas. Deberá garantizarse en todo caso la asistencia por un ser humano a solicitud de la persona interesada.
4. Se prohíbe el uso de servicios basados en Inteligencia Artificial dirigidos a manipular o perturbar la voluntad de las personas, en cualesquiera aspectos que afecten a los derechos fundamentales.

Comentario 18:

Sería más apropiado garantizar los servicios basados en Inteligencia Artificial (IA) y no los sistemas que componen dichos servicios.

Es necesario adecuar la redacción actual para evitar entrar en conflicto con la actual normativa de protección de datos, evitando establecer una nueva obligación no regulada; sólo sobre los servicios basados en Inteligencia Artificial que puedan afectar significativamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos podrán ejercerse el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

En el apartado 1 debería incorporarse un nuevo epígrafe al objeto de garantizar que los servicios basados en IA responderán a criterios de ética y transparencia.

En relación a la garantía que debe ofrecerse sobre los Servicios de Inteligencia Artificial, se utilizan términos equivalentes y algún vocablo nuevo cuyo significado no se incluye por lo que las garantías que se exigen no son claras, deberían elegirse otros términos o incluir el significado de los términos utilizados (información, transparencia, auditabilidad, “explicabilidad” y trazabilidad), para evitar equívocos.

XXIV

Derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías

1. Las condiciones, límites y garantías de implantación y empleo en las personas de las neurotecnologías serán reguladas por la ley con la finalidad de:

- a) Preservar la identidad individual como conciencia de la persona sobre sí misma.
- b) Garantizar la autodeterminación individual, soberanía y libertad en la toma de decisiones.
- c) Asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales y el pleno dominio y disposición sobre los mismos.
- d) Ordenar el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad física o psíquica.
- e) Asegurar que las decisiones y procesos basados en neurotecnologías no sean condicionadas por el suministro de datos, programas o informaciones incompletos, no deseados, desconocidos o sesgados, o por intromisión en conexiones neuronales.

2. Para garantizar la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación, y de acuerdo en su caso con los tratados y convenios internacionales, la ley regulará aquellos supuestos y condiciones de empleo de las neurotecnologías que, más allá de su aplicación terapéutica, pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas.

Comentario 19:

Dado el estado aún incipiente de aplicación de esta tecnología, la Carta debe cuidar no introducir obligaciones que dificulten el despliegue de la misma.

Indicar que han quedado excluidas de la Carta otras tecnologías que pueden tener un alto impacto en los derechos de la personas como BigData, IoT, biogenética, drones, ...

XXV

Garantía de tutela administrativa y judicial en los entornos digitales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial específica, todas las personas tienen derecho a la tutela administrativa y judicial de sus derechos en los entornos digitales.
2. Cuando la lesión de tales derechos, o el daño causado, produzca sus efectos en territorio español podrá invocarse la garantía de estos derechos por la autoridad administrativa o el órgano jurisdiccional competente en España.
3. Se promoverán mecanismos de autorregulación regulada y procedimientos de resolución alternativa de conflictos.
4. Los poderes públicos evaluarán las leyes administrativas y procesales vigentes a fin de examinar su adecuación al entorno digital y propondrán en su caso la realización de reformas oportunas en garantía de los derechos digitales.